

El obradorismo

Carlos Illades

Universidad Autónoma Metropolitana, México

A pesar del desgaste de la administración de López Obrador, los yerros, o de acontecimientos inesperados que han rebasado las exiguas capacidades gubernamentales, todavía no varían las condiciones que permitieron su triunfo, de la misma manera que al país no ha llegado la transformación prometida. Las élites (políticas, económicas e intelectuales) no han superado la crisis que estalló en el corrupto sexenio de Peña Nieto, la base social que desde 2006 acompaña a López Obrador permanece leal y la oposición cuenta con escasa credibilidad, amén de una política redistributiva que, aunque incipiente y cuestionable, ha contenido los reclamos populares. Pero no sólo eso, López Obrador tampoco ha perdido la capacidad de crear expectativas en un segmento considerable de la población y de despertar entusiasmo en las clases subalternas.¹ Es el único político importante que lo hace. Ello se debe a su inagotable capacidad de politizar cualquier evento o circunstancia, conformando una tensión dinámica que activa el conflicto al movilizar a los actores: invariablemente hay una tarea por hacer, una misión histórica que cumplir. Su público, los medios, sus adversarios siempre están esperando algo, con lo que López Obrador logra concentrar la atención en lo que va a pasar incluso aunque se trate de un despropósito. López Obrador volteó a ver al México olvidado y pobre, recorrió el país en una campaña permanente desde que contendió por la presidencia de

1. Sobre las transformaciones sociales en América Latina y las fuerzas políticas que las impulsaron véase E.J. Hobsbawm, *¡Viva la revolución!*, edición e introducción Leslie Bethell, traducción A. Grieco y Bavio, México, Planeta, 2018, pp. 337-338.

la República en 2006 sin dejar de hacerlo ahora que está por concluir su mandato y a pesar de su mal cardíaco. Esto trasciende el ánimo publicitario y manifiesta una genuina empatía con las clases populares. De hecho, López Obrador se ve más cómodo en sus giras de fin de semana a las entidades federativas que ocupándose de gobernar. Sin duda, esta conexión con el pueblo llano es una de las causas de su fuerza y popularidad. Suponer que ésta se basa exclusivamente en los programas sociales o en los sesgos de las conferencias matutinas significa soslayar una de las razones de su alta votación en tres elecciones presidenciales consecutivas, como también ignorar por qué mantiene una alta aprobación no obstante los fracasos en distintos rubros de su gestión. Con el objeto de mejorar la comprensión del obradorismo, este texto trata de sus rasgos esenciales en cuanto movimiento político, las características de su liderazgo, los componentes de su discurso público, las políticas como gobierno y los posibles lastres de su proyecto hegemónico.

El movimiento

Derecha e izquierda lucen desconcertadas con el obradorismo. Aquella suponía que el consenso entre los partidos de la transición (PRI, PAN y PRD) sería suficiente para administrar la economía y ordenar la política, que la cuestión social ocupaba un lugar subsidiario en la agenda nacional y que, si cerraba filas, podía bloquear la puerta de Palacio a la irrupción plebeya. Desmentido el pronóstico por una contundente votación en favor del candidato que ofreció el “cambio verdadero”, las explicaciones del fracaso electoral por parte del *establishment* intelectual fueron el negacionismo, considerarlo un “accidente”, atribuirlo a un electorado obnubilado e ignorante, a un pacto espurio de López Obrador con Enrique Peña Nieto o con el crimen. El planteamiento excluyó la revisión de sus premisas.²

2. En esa línea argumental véanse R. Bartra, *Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador*, México, Debate, 2021; Héctor Aguilar Camín, “El otoño del presidente”, *Nexos*, núm. 534, junio 2022, pp. 28-29, 32; Jorge G. Castañeda, “Narcopresidente”, *Nexos* en línea,

El obradorismo es un movimiento que no configura todavía ni una ideología ni un régimen político.³ Desarrollado en los últimos veinte años, el movimiento agrupa a las clases populares y a las clases medias bajas alrededor de un liderazgo carismático, castigadas de antiguo por la desigualdad, y en las últimas décadas, por la globalización excluyente. A esta base social se agregaron coyunturalmente contingentes de los sectores medios, de universitarios y ciudadanos de las entidades federativas (que solían votar por la derecha), por el descontento extendido con respecto del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquella base es leal y sólida, responde cuando las convoca el presidente o el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y está activa en las redes sociales. Es innegable que el discurso polarizador del presidente incentiva su movilización, como también lo hacen las políticas sociales de su gestión (aumentos al mínimo y a los salarios contractuales, diversos programas basados en transferencias directas, pensión universal para adultos mayores, regulación del *outsourcing*). Su carácter de movimiento es una razón entre varias que traban la interlocución del obradorismo con otros movimientos sociales (el feminismo, el neozapatismo) porque todos disputan entre sí la prioridad de sus demandas. Articulado de arriba hacia abajo, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal armó una estructura política a partir de los programas sociales dirigidos a las clases populares de la Ciudad de México que dio asiento a la base territorial del futuro MORENA. Con adecuaciones y en un cambio de magnitud, el modelo se replicó a escala nacional cuando

9 de febrero de 2024. Desde la perspectiva obradorista puede verse H. Gómez Bruera, *AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos*, México, Océano, 2021. Un estudio bien documentado es el de C. Elizondo Mayer-Serra, *Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional*, México, Debate, 2021. Mis argumentos los expuse en C. Illades, *Vuelta a la izquierda. La Cuarta Transformación en México: del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría*, México, Océano, 2020 y en *La revolución imaginaria. El obradorismo y el futuro de la izquierda en México*, México, Océano, 2024, fundamento el último del presente capítulo.

3. Los componentes del populismo (discurso, estilo, régimen) y el régimen de historicidad de éste los discuten E. Laclau, *La razón populista*, traducción S. Laclau, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005; E. Traverso, *Las nuevas caras de la derecha*, traducción Horacio Pons, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2018 y P. Rosanvallon, *El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica*, traducción Irene Agoff, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020.

el político tabasqueño alcanzó la presidencia de la República. Esta relación directa con el potencial electorado se solidificó con la presencia recurrente de López Obrador en colonias y delegaciones, provisto de un discurso sencillo y directo, centrado en los problemas comunes y las necesidades básicas de la población de bajos recursos. La cercanía discursiva además de física, no impostada sino producto de una larga trayectoria de trabajo comunitario, le rindió frutos. La convocatoria constante a sus adeptos y la narrativa construida con base en el agravio, el fraude electoral atribuido al Instituto Nacional Electoral (INE), proporcionaron el combustible para la activación del movimiento, agregándose las acciones de la derecha en el gobierno y el gran capital que, involuntariamente, coadyuvaron a cohesionar el obradorismo y a avivar el deseo de revancha de sus militantes. La estrechez de miras de las élites que condujeron la modernización neoliberal, seguras de que la protesta popular sería contenida (como en 1988 y 2006), en lugar de desmontarla, la potenciaron hasta escapar a su control desalojando al binomio PRI-PAN de Palacio y retirándolos de la conducción de la transición democrática y de la inserción del país en la economía global.

El liderazgo obradorista es carismático, unipersonal y autoritario. La administración pública, el partido, la diplomacia, la relación con la prensa, las obras de infraestructura, todo obedece a la voluntad, los tiempos y el humor presidencial. La comunicación y la distribución de beneficios a la población se da sin mediaciones institucionales, de manera directa entre el líder y el pueblo, sin fisuras. Un presidencialismo incontinente, en tensión con los marcos institucional y legal, remplazó a otro enteramente dócil al poder económico.

Como el presidente tabasqueño acrisola un conjunto de grupos e intereses en una coalición política precaria, carente de un fundamento ideológico o de un programa común de gobierno, al modo bonapartista, López Obrador se emplaza encima de los grupos sociales y arbitra sus disputas. La grieta en el sistema político abierta en 2018, que sancionó el fracaso de las élites dirigentes, conforma el espacio colmado por el hiperpresidencialismo, por lo que la viabilidad y funcionamiento del sistema político en estas condiciones –aparte de la inocultable personalidad autoritaria del

presidente— requiere su constante intervención. La pregunta entonces es si esta situación de excepción se normalizará o tomará una ruta distinta incluso aunque la coalición gobernante refrende la victoria precedente.

Ellos y nosotros

López Obrador es el ideólogo de la 4T. En sus libros, conferencias matutinas y mítines define las directrices políticas y precisa los mensajes que posteriormente replican las redes, comentan los medios, amplifica la militancia morenista y replica el ejército de boots en las redes. La megamarcha del 27 de noviembre de 2022 pasado culminó con el discurso del presidente donde definió su doctrina política y su forma de gobernar, que para él son indisolubles, como “humanismo mexicano”. Llevaba años el presidente coqueteando con el sustantivo, al que el “mexicano” pretende darle un mayor anclaje situándolo en una comunidad específica, hacerlo universal y nacional a la par, connotado también su peculiaridad. “Necesitamos heredar una teoría propia”, dijo el primer mandatario. Hasta en los conceptos, él quiere ser el guardián de su legado. La definición, no obstante, es vaga y ecléctica.

La antítesis amigo/enemigo se expresa en distintas oposiciones en el discurso obradorista (mafia en el poder/pueblo, conservador/Cuarta Transformación), pero con el mismo sentido: una totalidad unitaria y excluyente, el pueblo versus una minoría rapaz, retardataria y corrupta. Ahora bien, ese antagonismo hace sentido para un público amplio porque hablamos de un país tremendamente desigual e injusto. Sólo en la fantasía de la derecha México era un país fraternal y unido antes de la presidencia de López Obrador, trasmutando la causa en consecuencia.

El obradorismo concibe el pueblo como pueblo concreto (clases populares, pueblo llano) y no como cuerpo político (unitario y representable). El pueblo obradorista se desdobra en el de los ciudadanos en nombre y a favor de los cuales se gobierna (incluido el que cedió ante el crimen y será necesario redimir y recuperar), y en las fuerzas militares (el pueblo uniformado), salvaguardas de la soberanía nacional y garantes de la Cuarta

Transformación (4T). Un mismo sujeto comprometido en funciones diferentes, pero idéntico entre sus partes. Por tanto, la protesta feminista escapó al radar de López Obrador porque éste sólo registra las reivindicaciones procedentes de lo que reconoce como pueblo. Las demandas transversales no cuadran en la geometría presidencial, dado que ésta identifica lo popular, lo social y lo nacional, además que dichas demandas corren de abajo hacia arriba, aunque en realidad es en sentido inverso, dada la centralización en el Ejecutivo que gobierna el flujo reivindicativo. En el mejor de los casos, la exigencia feminista estaba inscrita en el ámbito de la sociedad civil, y ésta, en la que confluyen intereses encontrados, perturba la homogeneidad y la armonía que busca el presidente con su política social.

La contundente victoria obradorista en 2018, la elevada aceptación presidencial y la sólida base social, hablan de un consenso amplio entre las clases populares que, aunado a su discurso binario (el pueblo y el no pueblo) y a la mengua del apoyo por parte de algunos sectores (las clases medias urbanas, los jóvenes), muestra también los puntos ciegos del consenso obradorista. En relación con el no pueblo (“la mafia del poder”, las clases medias “aspiracionales”, los “conservadores”), la actitud del Ejecutivo es ambivalente: la satanización discursiva y la oportunidad de hacer negocios para el gran capital siempre y cuando se someta al mando presidencial. Consecuencia de esta concepción y práctica políticas es la amenaza permanente a la pluralidad y un acicate a la intolerancia. Como el no pueblo no puede desaparecer por decreto y tampoco hay una revolución social en el horizonte obradorista sino la “revolución de las conciencias”, el recurso contra aquél es el asedio desde la tribuna presidencial y las redes operadas por las instancias de comunicación gubernamentales.

El desplazamiento del término “mafia del poder” por el de “conservadores” en el discurso obradorista no es para nada ingenuo. Con él, la condena a las élites se extendió a todo quien discrepa de la línea presidencial, por lo que empresarios, adversarios políticos, feministas, periodistas, dirigentes sociales, ecologistas, jueces y científicos entran en el mismo costal que se dilata de acuerdo con el humor del inquilino de Palacio. La otra cara de la pluralidad que niega el obradorismo es la de los componentes de la nación, asumiendo implícitamente la mestizofilia procedente del siglo XIX y

adoptada como política oficial en la posrevolución. A los pueblos originarios la actual administración únicamente los reconoce, en igual forma que los demás gobiernos de la transición, en su diversidad cultural. El Estado homogéneo y unitario surgido de la Independencia, que alberga una sola nación, es el que impera en el imaginario presidencial donde no tiene cabida la autonomía territorial de aquellos pueblos y menos aún el autogobierno. Filón del discurso obradorista es el cristianismo. Cada vez más reiterados en el mensaje presidencial tanto las referencias bíblicas como la mención a Jesucristo cual reformador social. El primer socialismo también asumió la prédica de los primeros cristianos, pero no la derivó hacia un cristianismo conservador como hizo López Obrador. Éste habla todavía con menos recato de sus creencias religiosas que sus antecesores priistas y panistas, y sus libros enaltecen la fe cristiana convocando a amar el prójimo. La moral cristiana, con todas sus consecuencias prácticas, es objeto de la apropiación presidencial.

El proyecto obradorista, y el Ejecutivo mismo, están anclados en distintos momentos del pasado, de donde abreva para revestirse de densidad histórica y de una legitimidad pretendidamente irrefutable. López Obrador concibe la historia como una épica patria por lo que inscribe la propia en una secuencia de larga duración (Independencia, Reforma, Revolución, 4T), situando a sus adversarios en los bandos y periodos menos afortunados (conservadores, neoporfiristas, neoliberales). A cada cual la historia lo pondría en su lugar, siendo ahora el turno de los neoliberales, aunque, en realidad, en el discurso matinal se confunden los tres, por lo que también puede hablarse de que se presenta como un continuo de la derecha a través de los tiempos (el “bloque conservador”).

Las políticas

López Obrador encontró un Estado descompuesto y disfuncional. La corrupción, el tráfico de influencias y el contubernio de la política con el dinero eran tan evidentes como la deficiente administración pública, la duplicación de funciones y la incompetencia burocrática. De igual

manera, la penetración del crimen en distintos niveles de gobierno, instancias operativas y poderes de la Unión era notoria. Había que actuar para evitar que la gangrena acabara de contaminar el núcleo estatal y ello ameritaba un plan con objetivos claros y mensurables. Era razonable pensar que la solución marcharía por el camino de la profesionalización de la burocracia civil y la rendición de cuentas, pero las medidas de la 4T consistieron en la gestión centralizada, la mutilación indiscriminada del aparato administrativo y la cesión de competencias a las fuerzas armadas. Tampoco se rompió el nexo espurio de la política con el dinero, sólo que ahora también participaban los empresarios consentidos de la 4T. La ilusa metáfora según la cual “la corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo”, no hizo sino mostrar el voluntarismo presidencial, la falta de ideas y el nulo deseo de institucionalizar esta política y fortalecer al Estado en vez de desfondarlo.

En materia económica, el presidente se remonta a mediados del siglo XX, al esplendor del desarrollo estabilizador que corona Adolfo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica (supuestamente “renacionalizada” por López Obrador con la compra de 13 plantas de energía de Iberdrola por parte de un fondo de inversión privado respaldado por el gobierno), de quien convenientemente omite su política antisindical (la represión de los ferrocarrileros) y la celada a Rubén Jaramillo, muy caros a la memoria de la izquierda socialista, pero que dicen poco a la filia nacionalista del presidente.

Lo que se asume como una ruptura con el “periodo neoliberal” no es tal. Los fundamentos materiales del consenso obradorista se asientan en la continuidad de la élite económica conformada con la privatización de las empresas públicas en los noventa del siglo pasado (telecomunicaciones, minería, banca), en una capa de empresarios medios vinculados con el nuevo gobierno y en los numerosos beneficiarios de los programas sociales. Dentro del orden estatal, sin embargo, los cambios son notorios aduciéndose la urgencia de recuperar lo público para restituirlo al pueblo tras romper desde el Estado la colusión corrupta del poder político con el dinero. En aras de ese propósito superior se vindica la concentración del poder público en el Ejecutivo y la centralización de las decisiones

gubernamentales, la subordinación de los otros poderes de la República, la desinstitucionalización de la administración pública (agravada por el derrumbe de calidad de la gestión producto de la “austeridad republicana” y de la “pobreza franciscana” que le siguió) y el debilitamiento del poder civil dentro del Estado en favor de las fuerzas armadas. Esta erosión del ente estatal (moderno) pretende compensarse con el concurso de las instituciones premodernas, si bien la relación con la Iglesia católica quedó dañada por la indiferencia presidencial ante el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara a manos del crimen organizado.

De un lado tenemos que la centralización en el Ejecutivo socava los contrapesos del sistema republicano, pero tampoco ese poder se transfiere a la sociedad, ni siquiera a las clases populares para las cuales dice gobernar el presidente, además de las principales beneficiarias de su política social y potencial clientela política, muy a los viejos usos políticos del régimen mexicano. Ellas son actores pasivos que reciben las derramas en efectivo que llegan a la familia, la institución más antigua y objeto de la veneración presidencial. Esto es, no se crea ciudadanía sino se fomenta la dependencia con respecto del ente estatal. Minadas las mediaciones institucionales del Estado con la sociedad, un Ejecutivo incontinente, el Ejército con cometidos que exceden su naturaleza y rebasan las normas, una oposición únicamente reactiva y con una enorme crisis de credibilidad a cuestas, más una sociedad civil débil y desorganizada es lo que tenemos con el obradorismo. No hay evidencia que estemos en el carril ni de la democracia liberal, pero tampoco en el de la democracia participativa más allá de una apelación retórica.

Los bastiones obradoristas son las corporaciones caras al conservadurismo clásico: el Ejército, las iglesias y la familia. Las competencias del instituto armado, más las de la Marina, desbordan el mandato constitucional, en la medida en que se extienden a la seguridad pública (incluida la cabeza del sector), la administración de puertos y aduanas, la construcción de aeropuertos y sucursales bancarias, la distribución de medicamentos, seguridad sanitaria y un larguísimo etcétera. Esto es, el Ejecutivo ha debilitado el poder civil dentro del Estado en favor del brazo militar. Las iglesias ganan terreno dentro del espacio público –favorecidas por la reforma

constitucional del gobierno de Carlos Salinas de Gortari— además de intervenir explícitamente en organizaciones políticas (el Partido Encuentro Social que integró la coalición gobernante). La familia no sólo deposita los valores morales de la sociedad, sino también de las asignaciones directas de los programas sociales, financiados cuando menos en parte con los recortes al propio gasto social (Educación, Salud). De acuerdo con el dicho presidencial ésta es “la principal institución de seguridad social que existe en el país”. Incondicional de los Estados Unidos, el presidente se plegó a la criminal política migratoria de Donald Trump (que poco y nada cambió Joe Biden) cumpliendo la Guardia Nacional la función de una patrulla fronteriza extraterritorial, aceptando también que México recibiera a los migrantes latinoamericanos mientras el gobierno estadounidense decidía si les otorgaba visas, además de no hacer una presión diplomática suficiente para proteger los derechos de los migrantes mexicanos.

El crimen y el Ejército actúan como poderes de facto ante a los cuales el presidente se plegó para llevar a cabo su proyecto. Las consecuencias de este riesgoso acomodo no son suficientemente visibles hoy, pero prometen ser altamente negativas. Esto no quiere decir que no se combata intermitentemente a aquellos grupos que bien saben del amplio margen de acción que les permite operar sin grandes escollos. Y el Ejército aprovecha los privilegios que tanto le reeditúan y que difícilmente podrán escatimársele en futuros sexenios gobiernos presumiblemente más débiles. López Obrador benefició al instituto armado como ningún otro presidente en la historia moderna del país a cambio de mantener la estabilidad necesaria para realizar sus reformas. Contra su promesa de campaña de que regresaría a los soldados a los cuarteles con el propósito de desactivar la guerra interna, confirió a las fuerzas armadas —particularmente al Ejército— funciones y estímulos que exceden con mucho tanto el mandato constitucional como la lógica civilista del régimen de la Revolución mexicana. Frente a una iniciativa privada que considera real o potencialmente corrupta y a un Estado descompuesto y disfuncional, el presidente optó por convertir al Ejército “del pueblo” en el garante de la 4T en un entorno que suponía conflictivo. El instituto armado sin limpieza alguna que intervino en las huelgas obreras de los años cincuenta, disparó contra los estudiantes en

la Plaza de las Tres Culturas, realizó los vuelos de la muerte en la guerra sucia, participó en las masacres no aclaradas durante el calderonato y el peñismo, del que no sabemos hasta qué grado, aunque estamos ciertos, que también ha sido penetrado por el crimen.⁴

En su afán de cubrir todo el espectro político y subordinar a los demás poderes de la República, López Obrador pretende suplantar a la prensa al presentarse a sí mismo como la principal fuente de información y cual ministerio de la verdad acerca de lo que publican los medios. Esta tentativa de colonizar al “cuarto poder” escaló con la sección *Quién es quién en las mentiras de la semana*, una suerte de reality matutino de los miércoles, en el que se “desenmascaran” las noticias falsas o tendenciosas de los medios informativos. En paralelo, la agencia noticiosa estatal (Notimex), según varios de los periodistas afectados, lanzó ataques en las redes que dañaban su reputación y propaló noticias falsas a través de cuentas anónimas, antes de extinguirse, tras una larga huelga, por la manifiesta incompetencia de su directora. México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y la administración obradorista ha roto el nada envidiable récord de sus antecesores en cuanto a comunicadores asesinados en el ejercicio de su función, lo que hace más nociva esta práctica gubernamental reprochable de suyo. En vista de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apercibió al Estado mexicano para cesar esta acción intimidatoria que debilita el libre debate público.

López Obrador puso en práctica una política social con el fin de combatir la pobreza y la exclusión las que él considera las causas directas de la violencia criminal. No es claro que se lograra algún cambio sustantivo ni tampoco indicativo de la certeza del diagnóstico. Sin duda la pobreza y la exclusión conforman el hábitat de la delincuencia, pero no es posible establecer una relación causa-efecto entre ambas. Al respecto, el discurso obradorista posee cierta novedad en relación con sus predecesores: se trata de un discurso oblicuo que, de una parte, reconoce que se tiene que combatir el crimen, pero de otra parte ofrece “abrazos, no balazos”. La conducta pública de

4. Andrés Martínez, “Así eran los vuelos de la muerte con los que el Ejército mexicano desapareció a cientos de hombres y mujeres”, *Infobae*, 27 de noviembre de 2023.

López Obrador refuerza esta ambigüedad, siendo prueba fehaciente el saludo a la madre del *Chapo* en una de sus giras semanales, cuando en otros momentos se ha negado a atender a colectivos que claman justicia para las víctimas de la violencia. Mientras que los padres de los normalistas de Ayotzinapa merecieron durante cuatro años la deferencia presidencial, hasta que la administración federal decidió dar un nuevo carpetazo a la indagatoria. En sentido opuesto, la captura de Ovidio Guzmán, hijo del *Chapo*, fue considerada una acción “responsable”, haciéndose votos para que “las actividades regresen a la normalidad lo más pronto posible”. También es de resaltarse el carácter moralizante del discurso obradorista, especialmente para el caso de la violencia y el crimen, evidenciando con ello un conservadurismo clerical bastante sorprendente procediendo de un hombre que se considera juarista y de izquierda. Su respuesta ante los hechos de violencia son reprimendas paternas con el objetivo de disuadir a quienes portan mal convocándolos a retornar al camino del bien.

La hegemonía

Diversos factores complican la consolidación de la hegemonía de la 4T. Los compromisos contraídos con el T-MEC acotan considerablemente el campo de maniobra de un gobierno deseoso de recuperar el nacionalismo económico y las políticas desarrollistas de la época dorada del régimen de la Revolución mexicana. Al respecto, los arrebatos verbales del presidente y los subterfugios para eludir el marco constitucional desnudan más la impotencia que la fuerza. La interdependencia, con el añadido de que ocurre entre países con niveles de desarrollo tan dispares como son los de América del Norte, implica ceder parte de la soberanía nacional a cambio de algunas ventajas (el acceso al mercado), como nos recuerdan recurrentemente el desplazamiento de la Guardia Nacional a las fronteras para frenar el flujo migratorio centroamericano, la detención de algún capo o el decomiso de droga para tranquilizar al vecino del norte.

Otra porción de la soberanía está en poder de las organizaciones criminales. Refutando cotidianamente los buenos deseos presidenciales, la presencia

criminal se extiende geográfica y económicamente en el espacio nacional con una dinámica imparable. El control territorial, la fiscalidad y el monopolio de la violencia legítima los disputa o comparte el crimen con el Estado, dando lugar a una soberanía o gobernanza criminal en regiones enteras del país. El involucramiento cada vez mayor de los grupos criminales en los procesos electorales —coaccionando el voto, bajando o eliminando candidatos, imponiendo a los propios o a los afines— es la inquietante evidencia de la penetración del crimen en la sociedad política, amén de la progresiva captura de la esfera económico-social.

El ensanchamiento de las competencias militares, el crecimiento exponencial de su presupuesto a expensas de otros rubros sustantivos y el mandato de la seguridad pública son señales ominosas para el orden civil y la institucionalidad democrática, además acentúan el componente potencialmente coercitivo de la hegemonía obradorista. Acaso en una primera instancia la refuerce y frene a los adversarios, pero también abre el camino para que el aparato armado cobre autonomía con el incremento de su poder, pese cada vez más en las decisiones públicas o intervenga en la política.

Hay también factores internos que complican la consolidación de una nueva hegemonía. Son evidentes de suyo la laxitud organizativa, conflictividad, precariedad formativa de la militancia y el escaso aprecio que MORENA muestra por las normas y la convivencia democrática. MORENA básicamente articula un cúmulo de intereses, pero carece de disciplina y la única directriz que sigue es la voluntad presidencial. Sin un liderazgo fuerte en Palacio Nacional, no sabemos qué otro pegamento sirva para cohesionar estos intereses. Conexa a esto es la carencia de una intelectualidad robusta que conforme el ideario del partido y elabore un proyecto de gobierno transexenal. Hasta el momento, ésta no ha pasado de traducir en el debate público las máximas presidenciales. Señala de esta precariedad discursiva fue que las políticas desarrollistas inspiradas en el nacionalismo revolucionario no compitieron con proyectos alternativos perfilados desde una perspectiva socialista.

De no institucionalizarse la 4T y cuajar MORENA como partido, después del liderazgo centralizado de López Obrador posiblemente sobrevenga la

fragmentación y acaso sobreviva lo que queda de la izquierda socialista más la joven militancia que haya logrado formar. El peligro de la desinstitucionalización es que cualquier formación política, sin importar su filiación ideológica, puede beneficiarse de ella. Las derechas radicales han sido mucho más eficaces que las izquierdas para captar el descontento con las políticas neoliberales y el deterioro de la democracia representativa. Acaso el éxito mayor de la administración obradorista fuera evitar esa fuga. El llamado régimen de la transición democrática trató de superar el modelo autoritario de la posrevolución. Fracaso por la corrupción de sus élites, la desigualdad social inherente a su política económica y la guerra interna e irregular que entabló con el crimen organizado.⁵ El endeble andamiaje de este régimen ha crujido con el presidencialismo revigorizado e incontinente del obradorismo. No obstante, la hegemonía de éste todavía no se consolida ni tampoco da lugar a un nuevo régimen político que concretaría la 4T, hasta ahora un propósito más que una realidad tangible. La obsesión presidencial por manejar todos los hilos de la sucesión de 2024 y por derruir los frágiles pilares de la alianza Va por México, además de una pulsión autoritaria, expone la preocupación de que la construcción hegemónica no está concluida y la duda de si será posible que sobreviva sin su liderazgo. Una centralización tan vasta del poder político y del manejo de sus engranes entraña el riesgo de que el mecanismo se trabe al pasar a manos menos diestras. Asimismo, los elementos disruptivos mencionados pueden adquirir un peso mayor cuando el sexenio llegue a su fin. Metido de lleno en la sucesión, la estrategia de López Obrador para ocultar a su candidato o candidata fue “destapar” a muchos, tratando de convencer a la opinión pública que él no será el gran elector porque “ya no hay dedazo”. Aparte de que esto es inverosímil, la sucesión adelantada dio ventaja al obradorismo, ha puesto en un predicamento constante al árbitro electoral y perjudicó la función pública deficiente de suyo al tener desde muy temprano a los aspirantes morenistas ocupados en su autopromoción. Contra

5. Véanse al respecto C. Illades y T. Santiago, *Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra*, México, Era, 2014 y *Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero*, México, Gedisa/UAM, 2020.

lo expresado reiteradamente por el presidente, es poco creíble su retiro de la política o que no meta las manos en el nuevo gobierno, sobre todo si pensamos que él designó a quien le suceda y la eventual victoria será, con mucho, obra presidencial. Aquí cabe la hipótesis de un Maximato, esto es, una figura tutelar en la sombra, con una presidenta débil que gobierne en nombre de la 4T.

Bibliografía

- Aguilar Camín, H. “El otoño del presidente”, *Nexos*, núm. 534, junio 2022, pp. 26-36.
- Bartra, R. *Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador*, México, Debate, 2021.
- Castañeda, J.G. “Narcopresidente”, *Nexos en línea*, 9 de febrero de 2024.
- Elizondo Mayer-Serra, C. *Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional*, México, Debate, 2021.
- Gómez Bruera, H. *AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos*, México, Océano, 2021.
- Hobsbawm, E.J. *¡Viva la revolución!*, edición e introducción Leslie Bethell, traducción A. Grieco y Bavio, México, Planeta, 2018.
- Illades, C. *Vuelta a la izquierda. La Cuarta Transformación en México: del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría*, México, Océano, 2020.
- Illades, C. *La revolución imaginaria. El obradorismo y el futuro de la izquierda en México*, México, Océano, 2024.
- Illades, C. y Santiago, T. *Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra*, México, Era, 2014.
- Illades, C. y Santiago, T. *Mundos de muerte. Despojo, crimen y violencia en Guerrero*, México, Gedisa/UAM, 2020.

Laclau, E. *La razón populista*, traducción S. Laclau, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.

Martínez, A. “Así eran los vuelos de la muerte con los que el Ejército mexicano desapareció a cientos de hombres y mujeres”, *Infobae*, 27 de noviembre de 2023.

Rosanvallon, P. *El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica*, traducción Irene Agoff, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020.

Traverso, E. *Las nuevas caras de la derecha*, traducción Horacio Pons, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2018.